

# Neoliberalismo y política: la crisis mexicana

*Lucio Oliver  
Eduardo Ruiz  
Irene Sánchez y  
Raquel Sosa*

## **Resumen**

En la primera parte de este artículo colectivo, se analiza el impacto sociopolítico del modelo neoliberal aplicado en América Latina: las modificaciones en las estructuras de dominio, en los sistemas políticos y en las estructuras sociales que, en conjunto, han generado fenómenos de violencia política en toda la región. Esto enmarca el análisis de la coyuntura mexicana que, según los autores, se caracteriza por atravesar una situación de "crisis integral", producto de las particularidades que asumió el modelo neoliberal en ese país. Tras analizar cómo y por qué tales particularidades llevaron a la compleja situación actual, concluyen que, contra lo que pudiera pensarse, no es muy amplio el abanico de posibles salidas a la crisis.

## **Abstract**

In the first part of this collective article the sociopolitical impact of the neoliberal model relevant to Latin America is analysed: the modifications to the structures of domain, to the political systems and to the social structures which have generated political violence in the region. These issues provide the setting to analyse the fact that the critical moment in México is distinguished for being in a "integral crisis" situation. After evaluating how and why the country goes through the current situation the authors conclude that the possible solutions of the crisis are scarce.

En los últimos años de la década pasada y con más claridad en la primera mitad de la actual, se han hecho evidentes los efectos negativos de la aplicación de las políticas neoliberales y de las nuevas formas de acumulación del capitalismo latinoamericano. Esos efectos negativos han desbordado los límites del consenso y la estabilidad: hoy la tendencia es al sostenimiento del modelo bajo medidas autoritarias y antipopulares.

A la vista están el descontento social por el desempleo, el estancamiento económico prolongado, los desajustes financieros, el agobio de la deuda externa, los bajísimos salarios, el recurrente retorno de la inflación descontrolada, las devaluaciones imprevistas y la disminución de la calidad de vida. En especial, como un dato sustantivo, está el empobrecimiento masivo de la población y el incremento del índice de pobreza en la región, incluyendo los países que tradicionalmente habían presentado los índices económicos más altos del subcontinente.

*Estudios Latinoamericanos, núm. 4, Nueva Época, año 2, julio-diciembre, 1995.*

Las consecuencias negativas han alcanzado ya a las estructuras de dominio, a los sistemas políticos y al juego institucional. Tratándose, pues, de un fenómeno complejo y generalizado al conjunto de la región, se hace imprescindible explicarlo y analizar las repercusiones que ha provocado en la sociedad y la política latinoamericanas para visualizar las tendencias que comporta el proceso. Evidentemente ésta es una tarea complicada que requiere un análisis interdisciplinario que dé cabida a nuevas categorías, si queremos arribar a una comprensión a fondo del fenómeno. Por lo demás, el reto se multiplica si pensamos que estamos ante un fenómeno en curso; a diferencia de los análisis que el pensamiento latinoamericano desplegó para comprender los efectos políticos y la "lógica del modelo económico" prevaleciente en nuestros países desde la posguerra, ahora estamos ante uno cuya vigencia es corta aún y no ha desplegado todas sus tendencias.

Existe una cantidad importante de estudios que, desde la perspectiva económica, dan cuenta de las características generales del modelo y de su lógica interna.<sup>1</sup> Nosotros nos proponemos indagar sobre las expresiones sociopolíticas del fenómeno sin, por ello, perder de vista la interrelación entre ambos espacios analíticos. Creemos que —no obstante que aún falta cierto camino por recorrer en cuanto a la comprensión y la crítica del neoliberalismo latinoamericano— ya existe material analítico suficiente que nos brinda un marco general a partir del cual estudiar las particularidades nacionales del modelo. En esta dirección, el escrito que ahora presentamos tiene como eje articulador el "caso mexicano", el cual abordamos no sólo por un interés en sí mismo y con la intención de explicar la coyuntura actual, sino precisamente con el ánimo de rescatar aquellos elementos comunes a los acontecimientos sociopolíticos que caracterizan a otros países del subcontinente.

Es en esta línea que diversos investigadores del CELA y otras instituciones estamos trabajando dentro del Área "Estado y Procesos Sociopolíticos en América Latina" del Centro de Estudios Latinoamericanos. Aun cuando este ensayo es responsabilidad exclusiva de los autores, en gran medida expresa el debate que hemos realizado y que ahora entregamos, en sus elementos centrales, al público latinoamericano.

<sup>1</sup> Entre otros: Pedro Vuskovic, *Pobreza y desigualdad en América Latina*, México, CIIHUNAM, Col. Alternativas, 1993; José C. Valenzuela Feijóo, *¿Qué es un patrón de acumulación?*, México, Facultad de Economía, UNAM, 1990; Germán Sánchez, "Diez reflexiones sobre el neoliberalismo en América Latina y el Caribe", en *Cuadernos de nuestra América*, vol. IX, núm. 19. La Habana, Centro de Estudios de América, julio-diciembre de 1992, pp. 3-22; René Villarreal, *La contrarrevolución monetarista*, México, FCE, 1983; del mismo autor, *México 2010: de la industrialización tardía a la reestructuración industrial*, México, 1988; John Saxe-Fernández, "Globalization: processes of integration and disintegration", en *International Journal of Politics, Culture and Society*, New York, Human Science Press, 1994.

## I

*El neoliberalismo latinoamericano*

Sin pretender ser exhaustivos, podemos decir que en lo tocante a sus manifestaciones políticas, el neoliberalismo ha asumido los siguientes rasgos en la región:

1. El poder de los gobiernos nacionales se debilita notoriamente en forma paralela al peso inusitado que adquieren el gran capital privado internacional, las instituciones financieras transnacionales y los gobiernos de los países ricos, especialmente el de Estados Unidos. Las políticas económicas y sociales son determinadas al margen del juego político nacional interno y no se sujetan a las reglas democráticas; por el contrario, se les sustituye por mecanismos de concertación corporativa entre la tecnocracia y algunos grupos de empresarios y trabajadores, sin considerar al conjunto de la sociedad.

2. Se profundiza el fenómeno de concentración-marginación tanto en la economía como en la política, en donde en ambos espacios hay sectores integrados, altamente dinámicos, y sectores excluidos sin participación real. La lógica del modelo lleva a que la dominación sufra un proceso de *neoligarquización*: un reducido grupo de privilegiados por el modelo es el que toma las decisiones de impacto nacional de acuerdo exclusivamente a sus intereses sectoriales. Es un grupo cerrado de poder el que asume la conducción del Estado y la política sin las mediaciones institucionales establecidas anteriormente. La gran mayoría de la sociedad, de las organizaciones e instituciones sociales y políticas e incluso gran parte de los grupos económicos, quedan al margen de la política real y pasan a depender de las decisiones de la nueva oligarquía.

3. Para forzar los cambios económico-sociales que afectan a los trabajadores y enfrentar la resistencia social y popular, el poder se proyecta en forma autoritaria. Las instituciones que surgieron con el Estado-nación —el ejército, la burocracia, las universidades, los sindicatos, los partidos, etcétera— son transformadas o destruidas hasta convertirlas en instrumentos del interés político o económico del gran capital privado y de su racionalidad. Es así que surgen políticas de *neopopulismo autoritario*, el cual podría definirse como la imposición de políticas económicas y sociales cuyo punto de apoyo es la *mobilización coyuntural y selectiva* de sectores empobrecidos del pueblo a quienes se les manipula con dádivas y gestiones que atienden a los efectos y no a las razones de la pobreza. Con ello se pretende sustituir una vida institucional que en algunos países adquirió un carácter complejo y dinámico.

4. El fenómeno político se hace todavía más complejo debido a que, ante la inoperancia de los factores económicos y políticos tradicionales, se dinamizan grupos vinculados a la economía ilegal (producción y tráfico de narcóticos,

armamentismo y material bélico, contrabando de mercancías no reguladas, etcétera) que influyen de manera cada vez más profunda en la organización y funcionamiento del juego político nacional.

5. Una característica común del orden neoliberal es la modificación de las capacidades de decisión al interior del aparato estatal: reforzamiento del Ejecutivo, dependencia prácticamente directa del aparato judicial al Ejecutivo, restricción del Legislativo a su mínima capacidad (y, en ciertos casos, supresión temporal, cierre y reapertura de sus órganos para ponerlos más directamente en función de las decisiones ejecutivas).

6. Recurrentemente sobrevienen crisis políticas, producto del choque entre la dirección cerrada del Estado y las resistencias a la aplicación del modelo neoliberal. Esas crisis se dan en un contexto en el que se mantienen las instituciones y las relaciones políticas tradicionales a espaldas de los problemas y las demandas de la sociedad y de las fuerzas políticas críticas; en ese sentido, no se constituyen alternativas sustanciales y el juego político se hace inoperante. Como ya mencionamos, surgen opciones de neopopulismo autoritario como sustituto de la vida institucional y para obstaculizar la búsqueda de alternativas democráticas.

7. El neoliberalismo encontró un espacio propicio para su expansión por los cambios que se incubaron en los últimos decenios en las sociedades latinoamericanas, los cuales paulatinamente fueron inclinando a grandes franjas de la población hacia el conservadurismo. En esto tuvo un papel importante la confluencia de varios elementos: la búsqueda de seguridad y orden, miedo al cambio, despolitización. El modelo económico encontró, así, una sociedad conservadora y disgregada que le facilitó su implantación y, sobre todo, le permitió crear sus fuentes de legitimación.

### *Cambios en las relaciones de dominación*

Las nuevas formas de acumulación transnacional y el dominio del capital financiero han incidido directamente en las relaciones sociales de dominación existentes en América Latina. En algunos países el dominio del capital monopólico ya había desplazado a la dominación conjunta de la burguesía, propia de las alianzas nacionalistas de mediados de siglo. Ese, sin duda, fue el caso de Chile, Brasil y Argentina después de los golpes militares que instauraron las dictaduras durante los años sesenta y setenta.<sup>2</sup> En otros países como México, Colombia y Venezuela, el capital monopólico mantuvo una alianza básica con sectores de la burguesía pequeña y mediana que le resultaba de gran utilidad

<sup>2</sup> Véase Gabriel Gaspar (comp.). *La militarización del Estado en América Latina*. México, UAM-Iztapalapa, 1985.

política, misma que pudo sostenerse mientras aquél dispuso de excedente económico suficiente para alimentar la subordinación del pequeño capital.

Hasta la década de los años ochenta, el capital financiero trasnacional coexistió con otras formas de capital vinculadas a una acumulación nacional. En esa década se genera una presión especial tanto por parte de los grupos empresarial-financieros internacionales como de los gobiernos norteamericanos para modificar los Estados latinoamericanos y adecuarlos al nuevo proceso económico trasnacional. De este modo, queda abierto el camino para la dominación del capital financiero y para la entronización en el poder de sectores neoliberales de la tecnocracia del Estado y de las fuerzas armadas.<sup>3</sup> Irrumpe, así, el proceso que González Casanova<sup>4</sup> denomina de asociación trasnacionalizada (y subordinada) de nuestras economías al capital financiero (industrial y bancario) norteamericano. Con ese proceso se constituye la dominación plena del capital financiero trasnacional.

La resistencia de los trabajadores urbanos y rurales de América Latina, al igual que la de los sectores medios y pequeños de la burguesía nativa, frente al proceso de cambio de la dominación, fue del todo insuficiente y esporádica. En países como Brasil y Uruguay, los trabajadores pudieron acotar el grado de poder de la nueva dominación financiera; empero, no lograron evitar su entronización. Excepto en el caso de Cuba –país con una problemática especial– en general en América Latina los trabajadores fueron derrotados o cooptados: con mayor nitidez en los países grandes como Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia y México. Paralelamente se deterioraron las formas de defensa laboral expresadas en los contratos colectivos y se introdujo la modalidad de reconversión industrial y flexibilidad laboral para impulsar una productividad de nivel internacional.

El dominio del capital financiero trasnacional no sólo introdujo profundas transformaciones en los Estados, en los sistemas políticos y en general en la dominación política en América Latina, sino también redimensionó procesos en marcha. Esto –no obstante las particularidades específicas que ha asumido en cada país– ha derivado en un fenómeno común a la región: nos referimos a la constitución de una nueva dominación del capital financiero (neoligárquica), la cual ha modificado aquélla basada en la participación de diversas fuerzas del poder económico y político en el que coexistían el capitalismo de Estado con diversos capitales privados. La sustitución de este esquema de dominación por

<sup>3</sup> Véase John Holloway, "La reforma del Estado: capital global y Estado nacional", *Perfiles Latinoamericanos*, año I, núm. 1, México, FLACSO, diciembre 1992, pp. 7-32.

<sup>4</sup> Pablo González Casanova, "Estado y política en América Latina", en Pablo González Casanova (comp.), *América Latina hoy*, México, Siglo XXVUNU, 1992.

uno de carácter neoligárquico ha dado lugar al dominio de una cúpula restringida de poder económico y político formada por grandes oligarcas modernos de las finanzas y la industria, cuyo poder se asienta en un proceso de acumulación excluyente: la aguda concentración y centralización del capital ha destruido y/o desplazado al pequeño y mediano capitales.

### *Desigualdad, pobreza y violencia política bajo el neoliberalismo*

Los efectos políticos y sociales de estos cambios en la dominación generan la tendencia a excluir de la actividad política regular a vastos sectores de la sociedad por, al menos, una de tres vías: limitación de la participación de la población al sólo ejercicio del voto (que no necesariamente es respetado, sobre todo cuando sus resultados son incómodos a los grupos dominantes); restricción severa o impedimento al ejercicio de la representación de las organizaciones sociales, que no encuentran cauces suficientes en los partidos, y desacreditación general de las tareas de gobierno ejercidas por las organizaciones políticas opositoras. A esto debemos agregar que, al interior mismo del grupo dominante, el proceso de concentración y centralización del capital, ha tenido como efecto político el excluir a algunos sectores empresariales —sobre todo medianos y pequeños— del proceso de la toma de decisiones.

En estas condiciones, es cada vez más fuerte la tendencia a que los conflictos políticos carezcan de canales de negociación, así como de formas institucionales estables de solución. La academia conservadora suele hablar de "ingobernabilidad", término usado por los estrategas de seguridad nacional norteamericana obsesionados por el control social. Nosotros creemos que es necesario referirse, más bien, al predominio de un régimen de exclusión que coloca en límites amenazantes la persistencia del orden, salvo por las acciones de fuerza que puedan ejercerse desde los aparatos de poder.

En los últimos quince años una proporción muy elevada de la población latinoamericana se ve enfrentada a la disminución sensible de sus ingresos, requiriendo en una medida importante de fuentes adicionales de ingreso para garantizar su supervivencia; o bien, se ha visto obligada a cambiar radicalmente su forma de vida, sus relaciones y hasta su lugar de residencia, sin que, con frecuencia, ello implique una mayor capacidad de solución de sus necesidades básicas.

En el primer caso se encuentran tanto los trabajadores temporales o estacionales, como los subempleados, muchos de los cuales se han dedicado a los servicios o al comercio ambulante; como quienes tienen empleos temporales o estacionales; en el segundo caso, se encuentran los refugiados, los desplazados, los migrantes y los desempleados permanentes, sin olvidar por supuesto a los

grupos indígenas a cuya situación de pobreza se agrega el elemento de discriminación racial.

Es en este marco que podemos entender por qué, en gran medida, los referentes orgánicos de estos grupos son inestables y tienden a ubicarse en función de demandas específicas dirigidas al aparato estatal, con resultados generalmente frustrantes. La apatía y el resentimiento son sus denominadores comunes y sus respuestas –tan dramáticas como imprevisibles– son asociadas por los medios de comunicación y la academia conservadora con hechos de violencia: el incremento de la delincuencia común, el servicio a *maffias* o grupos de poder, o el protagonismo en actos aislados de justicia social (asaltos a transportes, a supermercados, linchamiento de policías o funcionarios corruptos, tomas de tierras o alcaldías, bloqueos de carreteras, etcétera). Los “formadores de opinión pública” suelen identificar a estos sectores como los responsables fundamentales de la violencia política que sufre nuestro subcontinente. Nada más lejos de la realidad. Las estadísticas muestran que la violencia social vinculada a la supervivencia se restringe a actos esporádicos e inorgánicos de resistencia frente a políticas o abusos de poder.

Por el contrario, la violencia política está fundamentalmente asociada a una de tres fuentes: los conflictos existentes al interior de los bloques políticos y económicos dominantes; el uso ilegal o ilegítimo de los aparatos de control y las fuerzas de seguridad pública en la represión a grupos políticos opositores, y en un lugar bastante secundario, la acción armada de fuerzas políticas que aspiran a transformar o influir en el orden político existente.

Con frecuencia, la imposición de medidas asociadas al nuevo orden neoliberal ha conducido a rupturas de pactos políticos previos; a un estrechamiento del sistema de alianzas, con la consecuente expansión de los conflictos políticos entre los sectores dominantes; a un creciente intervencionismo externo, tanto económico como político; y como corolario, al deterioro de los regímenes y de las relaciones de poder en que se fundan los Estados. En estas condiciones, los enfrentamientos al interior de los grupos dominantes suelen presentarse bajo una de tres formas: el asesinato o atentado político; la persecución política y policiaca de altos dirigentes empresariales o funcionarios gubernamentales acusados de fraude, corrupción, malversación de fondos y/o hechos de violencia política, y la destitución, desprestigio o exilio de acusados por estos mismos delitos.

Por su parte, la reducción de los presupuestos públicos –que ha sido evidente en materia de salud, servicios, seguridad social y educación– no ha afectado prácticamente a las fuerzas de seguridad pública. En la mayor parte de los casos, el presupuesto destinado a las fuerzas armadas se ha incrementado a lo largo de estos años. En general, tal incremento ha estado vinculado con la “coopera-

ción externa", es decir, con la ayuda material, asesoría o intervención directa de fuerzas de seguridad dedicadas al combate al narcotráfico, el terrorismo o la migración, concebidos como ejes de la nueva política de seguridad nacional norteamericana. No existen excepciones al incremento de presupuestos destinados a los diversos cuerpos policíacos, en particular, de aquellos que se ocupan del control de las poblaciones urbanas. Un complemento significativo de estas fuerzas son los grupos armados "irregulares" al servicio de grupos de poder económico o político.

Contrario a las expectativas de una transición a la democracia posterior a las dictaduras militares, el orden neoliberal se ha caracterizado por un recrudecimiento de las formas autoritarias de gobierno. Así, la violencia política es fundamentalmente producto del reacomodo de los grupos dominantes, así como de un requerimiento adicional de control de un orden profundamente alterado por el cambio en las relaciones sociales y políticas.

## II

### *México: un caso ejemplar de crisis neoliberal*

México no sólo ha concentrado de manera espectacular la mayor parte de las contradicciones propias del modelo neoliberal; éstas, además, han profundizado en este país sus efectos negativos dada la conjugación de dos factores: primero, el eje de la reestructuración económica ha sido el capital financiero en detrimento del capital productivo, lo cual provocó una paulatina pero sostenida disminución de la riqueza social; un desequilibrio de este tipo lleva a cualquier economía, más temprano que tarde, a extremos graves de debilidad por cuanto la riqueza no se genera desde el ámbito productivo, sino que se acumula desde el especulativo. La recomposición social que genera este esquema tiene características tales que —como veremos más adelante— provocarán desequilibrios importantes en el conjunto del sistema político mexicano.

El segundo factor se refiere a la manera extremadamente acelerada y ortodoxa con que el modelo neoliberal fue aplicado en el país. No sólo se hizo en un cortísimo lapso —dos sexenios, siendo el segundo el del despliegue total—, sino también se siguieron al pie de la letra todos y cada uno de sus presupuestos doctrinarios. Así, por ejemplo, además de la profunda reforma del Estado, los capitales transnacionales y nativos actuaron prácticamente sin controles: no les fueron aplicadas medidas restrictivas mínimas como podrían ser la obligación de destinar algún porcentaje a la producción o la obligación de permanecer en el país por un tiempo determinado, ni mucho menos algún control sobre los

excedentes. La "libertad económica" (*sic*) llevada al extremo transformó en pocos años a México en el paraíso mundial de la especulación financiera.

Ambos aspectos –la especificidad del eje que articuló al modelo y lo acelerado de su aplicación– están en la base de la crisis económica actual del país. Pero la reorientación acelerada hacia el modelo neoliberal no coincidió con la prometida "modernización" del sistema político. De ahí que hoy México manifieste una crisis –en contraste con la que en mayor o menor grado viven los otros países latinoamericanos– de grandes alcances por cuanto tiene un *carácter integral, es decir, se trata de una crisis económica, cruzada por una crisis política y que, al condicionarse ambas mutuamente, impactan a la sociedad en su conjunto*. En esto radica la gravedad y complejidad de la crisis mexicana.

### *Una breve mirada al pasado reciente*

Durante muchas décadas, la mexicana fue una economía de gran solvencia debido, en primer término, a las transformaciones estructurales de principios y mediados de siglo, pero también gracias a sus potencialidades naturales y, en gran medida, a su vecindad con Estados Unidos. Por otra parte, la aceptable cuantía del excedente económico generado por el país brindó la posibilidad de sostener una significativa proporción de gasto social. Es el conjunto de estos factores lo que permitió al sistema mantener durante un largo periodo las políticas de corte redistributivo cuando todavía no enfrentaba el problema de la gran presión demográfica.

De esa manera, los sucesivos gobiernos posteriores a la revolución de 1910-21 contaron con una base social propia que fue administrada directamente con base al corporativismo (sindical y campesino) y al caciquismo local, serviles al Poder Ejecutivo. La política distributiva se mantuvo hasta la administración gubernamental que culmina en 1982, año que inaugura la crisis más profunda y sostenida del sistema político mexicano.

Ya desde la década de los setenta, tanto la agricultura para el mercado interno basada en los ejidos y en la pequeña propiedad, como la industrialización subsidiada con la sobreexplotación obrera y con el proteccionismo estatal, empiezan a mostrar claros signos de agotamiento: el modelo económico de capitalismo de Estado en coexistencia con el capital monopólico privado mexicano, mostraba sus límites. Los recursos generados por el petróleo, sin embargo, pospusieron el colapso de la economía nacional en los primeros años de década de los ochenta. Hacia 1982 –durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988)– se abrirían las puertas de la transición mexicana al modelo neoliberal bajo la presión de la crisis de la deuda externa y de los grupos financieros transnacionalizados. En la política, la neooligarquía dominante impi-

dió que la burocracia gobernante contara con el excedente suficiente para aceitar las añejas alianzas con las masas populares subordinadas, así como para subsidiar las altas ganancias artificiales de las burguesías parasitarias que florecieron al amparo de los negocios del Estado.

La tecnocracia neoliberal, que desde 1982 empezó a ocupar puestos clave en el aparato estatal, se alió con el gran capital financiero transnacional y se encargó del diseño de las nuevas políticas económicas y sociales. En efecto, en la década de los ochenta se combinan en México diversos factores: la gran crisis mundial de comienzos de la década, la más grande acumulación de deuda externa en toda la historia nacional y el comienzo de la aplicación más vertiginosa y ortodoxa en toda América Latina de un neoliberalismo financiero-especulativo.

La crítica al viejo Estado capitalista nacionalista y popular se expresó con vehemencia en el programa de modernización que ofreció el presidente Salinas de Gortari (1988-1994). Entre sus objetivos centrales estaba el de atacar al Estado surgido de las reformas propiciadas por la Revolución: el Estado fue tachado de extenso, débil e incapaz de cubrir las necesidades de justicia social por estar ocupado políticamente en atender a las empresas públicas y regular excesivamente la economía nacional. El neoliberalismo mexicano adoptó, entonces, el programa de una reforma del Estado tendente a empequeñecerlo y fortalecerlo a fin de "dar más dinamismo a la sociedad civil". Habría que aclarar que, en la perspectiva de la tecnocracia mexicana, tal "sociedad civil" estaba constituida exclusivamente por los nuevos grandes grupos económicos empresarial-financieros, únicos capaces —según los ejecutores del modelo— de participar con éxito en la competencia del mercado mundial.

A partir de 1982, pero enfáticamente durante el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994), México experimentó una apertura indiscriminada al mercado externo de capitales y de bienes; se elevó, así, a cantidades sin precedente el ingreso de capitales especulativos atraídos por las altas tasas de interés, pero dado su comportamiento "golondrino" y las nulas restricciones administrativas, se generó una impresionante fuga de excedentes de capital, sobre todo cuando detectaron otros mercados más atractivos y cuando, en las postrimerías del sexenio, se presentaron los primeros signos de inestabilidad política. Al mismo tiempo, se dio un incremento exagerado de la importación suntuaria, generando un profundo déficit comercial exterior. Lo más grave de todo esto es, sin duda, la condición apendicular y tributaria que adquirió la economía mexicana respecto a los centros financieros de Estados Unidos y de los organismos multilaterales.

Otro capítulo que merece especial atención es la transferencia de un elevado porcentaje del capital social a manos privadas vía las privatizaciones de empresas del Estado, las que naturalmente pasaron —con precios ventajosos— a ser propiedad de grupos encabezados por políticos de la tecnocracia neoliberal y

sus socios empresarios nacionales y extranjeros. Esto, que se repite en casi todos los países latinoamericanos, por sus dimensiones y la manera indiscriminada en que se ejecutó en México, ha formado parte de la gran estafa histórica en contra del interés mayoritario de la sociedad. Privatización de áreas estratégicas, ilimitada libertad de mercado para las corporaciones, aranceles bajísimos, pactos obligados entre productores y obreros a partir de la flexibilidad laboral y la productividad del trabajo y políticas sociales restrictivas: todo ello se convirtió en política cotidiana de Estado.

Luego de que en agosto de 1994 los resultados electorales oficiales dieran el triunfo al régimen de Ernesto Zedillo, empezaron los primeros signos de un vertiginoso deterioro de las finanzas públicas. Incapaz de resolver el déficit de la balanza de cuenta corriente, el nuevo gobierno aplicó diversas medidas para modificar los límites de la flotación del peso. Ninguna de ellas tuvo los resultados esperados y, en diciembre, se anunció la extraordinaria devaluación del peso mexicano. La respuesta de los grandes empresarios no se hizo esperar: en menos de dos semanas, la fuga de capitales rebasó los 30 mil millones de dólares. La reserva federal quedó prácticamente vacía.

El apoyo del gobierno norteamericano y de los organismos internacionales se tradujo en nuevos préstamos por más de 40 mil millones de dólares, los cuales se destinarán al pago de las obligaciones contraídas con inversionistas extranjeros en acciones de la Tesorería de la Federación (conocidos como Tesobonos). Adicionalmente, la nueva deuda se finca en una garantía de pago: la cuenta por ventas de petróleo en el extranjero. Esta gravísima condicionante pone directamente en manos de la banca internacional el recurso que Lázaro Cárdenas expropió en 1938 para beneficio del país.

Por lo demás, las medidas tomadas abrieron paso a una inflación que se calcula será mayor del 45 por ciento en 1995; a una caída del Producto Interno Bruto de, por lo menos, 3 puntos (lo que implica condiciones de crecimiento negativo); y también, según cifras oficiales de mayo de 1995, al desempleo de seis millones de personas, es decir, de la tercera parte de la PEA.

Pese al optimismo de los organismos internacionales, para quienes el país ya está superando su difícil situación, México sigue frente a la crisis más severa y peligrosa de los últimos cincuenta años.

### *La crisis de las mediaciones políticas tradicionales*

A partir de 1988 el gobierno salinista profundizó la política pública restrictiva; la instauración de un modelo de capitalismo trasnacional asociado en posición subordinada a Estados Unidos, y una reforma del Estado conservadora y neoliberal. El nuevo poder tecnocrático financiero barrió con las viejas media-

ciones políticas –por cierto, cada vez más precarias– con los sindicatos corporativos, con las asociaciones campesinas tradicionales y con los grupos sociales ligados a la burocracia y al partido de Estado. Se abrió, así, el camino al autoritarismo sin mediaciones asociado a la mayor intervención de las fuerzas armadas en los asuntos políticos nacionales.

La reestructuración de los grupos económicos que actúan como ejes de poder sacuden la estructura dominante gestada en las décadas anteriores. En su pretensión por consolidarse, desplazan a otros y enfrentan a quienes desde cualquier posición atenten contra su carrera de enriquecimiento y de poder a partir de sus grandes asociaciones ilícitas. Esto desencadena una alta conflictividad "intradominante" que se manifiesta en asesinatos, amenazas, secuestros y toda la secuela delincencial propia de sistemas de poder en descomposición. Es así, entonces, que desde la propia estructura dominante surgen significativos factores de desestabilización del sistema.

Los últimos dos gobiernos neoliberales mexicanos trastocaron las mediaciones políticas tradicionales y acentuaron una férrea separación entre el diseño de las políticas públicas (política económica, política social, gasto público) y el debate político en el Congreso: lo primero es ahora negociado en privado con los círculos de gobierno y de poder económico financiero de Estados Unidos; lo segundo, ha quedado como el necesario trámite administrativo. Así, mientras las decisiones en torno a la reestructuración del país se han debatido realmente en el exterior, el parlamento –refrendando su ya conocida función de aprobar incondicionalmente las políticas del Poder Ejecutivo– se ha encargado de dar un barniz de legitimidad a medidas claramente contrarias al interés nacional. Tal fue el mecanismo con el que el gobierno salinista tomó las decisiones de mayor impacto nacional: entre otras, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la privatización de las empresas públicas, la desnacionalización de la banca, la creación de un mercado de valores.

Durante este periodo no se abrieron canales de información y producción cultural plurales que permitieran una real capacidad de decisión a los diversos sectores de la sociedad: ciertamente se crearon algunos espacios para dar cabida a opiniones distintas u opositoras a las del Estado, pero éste mantuvo un férreo control sobre los medios de comunicación nacionales con la connivencia de sus dueños.

La tradicional relación –propiciada durante décadas por el sistema político– entre gestión gubernamental y enriquecimiento, fue explotada al máximo durante el sexenio salinista, dando pie a los procesos de enriquecimiento más vertiginosos del mundo. Tan sólo como ejemplo: la prensa internacional destacó en 1994 –ante el escándalo de la opinión pública nacional– que entre la lista de 358 multimillonarios del mundo que publica la revista *Forbes* se encuentran 24

mexicanos, la mayoría de ellos con vínculos indirectos (prestanombres) o de tipo familiar con las altas esferas del poder nacional y que amasaron sus increíbles fortunas en un lapso no mayor de seis años.

En términos de su etapa de culminación, el fenómeno neoliberal no consume más de doce años, es decir, el ejercicio de dos sexenios gubernamentales. No obstante su corta vida, provoca trascendentales efectos políticos.<sup>5</sup> Apuntemos brevemente algunos de los más importantes:

1. Se mantiene prácticamente intacta la estructura institucional autoritaria de subordinación de las instituciones y la vida política a la élite dirigente y, en particular, a la figura presidencial. Frente al auge de las luchas democráticas y las posiciones que ha ido conquistando la oposición de centro izquierda (cuyo principal representante es el Partido de la Revolución Democrática, PRD), el gobierno ha respondido con el escamoteo a sus triunfos, con la represión o, como el mismo Carlos Salinas declaró, con oídos sordos y ojos cerrados. En contrapartida, el gobierno ha privilegiado un diálogo conservador con la oposición de derecha (en especial con el Partido de Acción Nacional, PAN).

2. Sobre esto último, desde los primeros años del sexenio salinista —y con más claridad en el actual gobierno de Ernesto Zedillo— se viene experimentando la posibilidad de construir un *bipartidismo conservador* —acordado tras bambalinas entre el jefe del Ejecutivo y el PAN— que excluye o limita los espacios de participación del PRD y otras fuerzas de centro izquierda. Esto explica por qué, a pesar de la franca oposición de los grupos de poder locales vinculados al partido oficial, en algunos estados de la República se ha aceptado la existencia de gobernadores panistas y, ya en el presente sexenio, se da el caso inusitado en la historia política mexicana del nombramiento de un miembro del PAN como procurador general de la República. La misma posición frente al PRD es impensable.

3. Es necesario destacar tres aspectos de notable importancia: el mantenimiento a toda costa del sistema de partido de Estado, el fraude electoral y la represión política. El reforzamiento de las atribuciones del Poder Ejecutivo, así como el absolutamente claro fraude electoral (cometido no sólo en las elecciones presidenciales de 1988 y 1994, sino también en las que se realizaron en los estados a lo largo de este periodo) fueron, en su combinación, los mecanismos idóneos para obtener dividendos varios: asegurar la continuidad en el poder del partido oficial; sostener el control mayoritario absoluto en las dos Cámaras, y garantizar el continuismo en los gobiernos de los estados y los municipios. Las reacciones a los fraudes, al "mayoriteo" priista en las Cámaras y a otras políticas autoritarias fueron (y son) reprimidas cada vez más violentamente, incluso con

<sup>5</sup> Para un análisis del neoliberalismo mexicano desde la perspectiva económica, puede verse el artículo (sobre todo la segunda parte) de Adrián Sotelo que aparece en este número de *Estudios Latinoamericanos*.

la desaparición y muerte de opositores, cuestión cada vez más cotidiana y desembozada.

4. Las decisiones sobre política económica que, como decíamos arriba, tienen sus ejes de dirección fuera del país, han resultado, como en ningún momento de la historia nacional, en una relación de dependencia tal, que las decisiones financieras han quedado transferidas *prácticamente sin mediaciones* al exterior. Esto ha significado la pérdida real de la soberanía en cuanto a decisiones de política económica y han terminado por convertirse en la peor traba para delinear un proyecto anticrisis en México sobre bases distintas.

5. En esta forma de funcionamiento político y económico, se ha consolidado un fenómeno de enorme importancia y de graves consecuencias nacionales: las *maffias* del narcotráfico se desenvuelven hoy sin mayores riesgos en tanto han logrado ampliar sus asociaciones con políticos y jefaturas de aparatos armados; se les ha facilitado, así, la realización de sus negocios de producción, comercialización, tráfico y lavado de dinero. En la actualidad es inocultable la participación mexicana directa en la movilización mundial de capitales provenientes del narcotráfico que, según cálculos conservadores, no es inferior al 10 por ciento del monto global mundial al año. Definidas así las cosas, se desencadena una carrera de enriquecimiento a través de la asociación más peligrosa para un país: empresarios especuladores, políticos carentes de ética, narcotraficantes y grupos corruptos supuestamente encargados de la seguridad.

6. A partir del 1º de enero de 1994, el escenario político mexicano se vio precisado a incluir a un actor más: el campesinado indígena levantado en armas, cuyo origen inmediato se encuentra en la pasada década, pero tiene raíces mediatas en el proceso de lucha de los años setenta en el sureste mexicano. Más allá de sus hondas raíces indígenas y la explicable elección de esa vía de lucha,<sup>6</sup> en la crítica coyuntura actual por la que atraviesa el país, el EZLN ha logrado respetables espacios de legitimidad real que rebasan con mucho la problemática propiamente chiapaneca.

### *Recomposición social: nuevos y viejos actores políticos*

La espectacular y vertiginosa puesta en práctica del modelo neoliberal en México llevó a un también acelerado y complejo proceso de recomposición de los actores sociales tradicionales. Desde el ámbito de lo político, dicha recomposición está en la base de la actual coyuntura y son precisamente sus efectos los que caracterizan el momento actual.

<sup>6</sup> Véase, entre otros, los artículos de Antonio García de León y Diana Guillén que aparecen en este número de *Estudios Latinoamericanos*.

La capacidad para resistir y cuestionar las políticas neoliberales en México está en relación directa con la existencia de relaciones de dependencia y subordinación de la mayoría de los grupos sociales a la hegemonía de la buro-tecnocracia política a través del corporativismo, el paternalismo, el partido de Estado y el presidencialismo omnipotente.

Una amplia capa de la población quedó sin empleo (aumentando el ya de por sí alto porcentaje de desempleados) y en su gran mayoría fue nutriendo al llamado sector informal. Este hecho, además de las obvias derivaciones económico-sociales, tuvo también consecuencias de carácter político: los sindicatos (tanto los oficialistas como los independientes), además de la disminución del número de sus miembros, vieron reducir su fuerza política. Así, con algunas excepciones, el sindicalismo deja de tener un peso político relevante, mientras que aquellos sectores que se amplían (o surgen) como producto directo del modelo, empiezan a adquirir importancia: informales, colonos, habitantes de barrios, migrantes, etcétera.

La relevancia de estos últimos no radica, en todo caso, en el nivel organizativo con que ahora cuentan para exigir satisfacción a sus demandas; aún más, en el mejor de los casos, estos nuevos sujetos se organizan alrededor de demandas sectoriales y/o locales sin lograr trascender todavía ese plano. Sin embargo, su fuerza, por más focalizada que esté, representa un potencial de explosividad que para el gobierno mexicano es vital mantener en los límites manejables. El programa de "apoyo a la pobreza", PRONASOL, ha pretendido jugar este papel.

En el campo, la marginación se profundiza y recibe el golpe de gracia con las reformas al artículo 27 constitucional, que con el propósito de abrir las puertas a la libre circulación del capital extranjero en el campo, llevan a la virtual desaparición del ejido (sustento ideológico político de la relación del Estado con el campesinado) y, sobre todo, oficializan el fin del reparto agrario. La reestructuración en función del TLC y el abandono gubernamental del área rural ahondan el cuadro de miseria y marginación. El campesinado —principal base social del sistema político posrevolucionario—, reducido a la extrema pobreza, es "abandonado" por un sistema que hasta ahora todavía podía y tenía voluntad política de protegerlo: para el modelo económico, los campesinos han sido los descartables entre los descartables. Dada la estructura del sistema político mexicano, esto es una situación grave, sobre todo si se suma a que los otros pilares básicos del régimen priísta —obreros, sectores populares— no tienen ya tampoco la misma firmeza y tienden a ser cada vez menos dóciles con los viejos controles institucionales.

Por su parte, los llamados sectores medios han vacilado en su identidad bifácica. Deslumbrados en un principio por la modernización neoliberal, pronto se han visto desplazados y empobrecidos. Esponja política de la dominación

capitalista, fluctúan entre las opciones autoritarias de derecha y las expresiones de inconformidad y resistencia de izquierda. Vista desde la perspectiva de los ingresos, es obvia la debacle que en pocos años han sufrido, ello aunado al cierre de sus espacios de participación y perspectivas de ascenso social. Como en ningún otro sector social, el impacto "animico" es mucho más profundo. En términos generales tiene –también a diferencia de otros sectores– mayores posibilidades, en principio, de organizar su descontento.

Al interior de la clase dominante se da también un proceso de reacomodo. Su perfil principal es el ascenso de un sector cuyo peso tiende a ser cada vez más prominente en las decisiones nacionales: banqueros, dueños de medios masivos de comunicación, grandes industriales del cemento, empresarios ligados a la telefonía, telecomunicaciones, grandes cadenas comerciales, etcétera. Es decir, el gran capital nacional ligado al gran capital transnacional pasa a ocupar un lugar relevante y directo en el ámbito de las decisiones políticas. Los sectores de la burguesía nativa subsidiaria del capitalismo de Estado que se nutrieron del modelo anterior pasan a un segundo plano tanto en las prioridades del modelo económico como en su relación con el poder.

Durante los primeros años de aplicación del modelo neoliberal, esa situación no rebasó los límites permisibles pero, una vez desatada la crisis en 1994, todo apunta a que lo que ahora son expresiones de descontento, pudieran convertirse en franca rebeldía. No deja de ser interesante, por inédita, la oposición de algunos grupos empresariales frente a las medidas gubernamentales tras la drástica devaluación de diciembre de 1994 y, sobre todo, el descontento –que de manera paulatina va cristalizando en medidas concretas– de pequeños y medianos empresarios (y recientemente también de algunos grandes) frente a la voracidad del sector bancario.

En su vertiginoso ascenso, los sectores más estrechamente ligados al gran capital transnacional no sólo desplazaron a algunos sectores de grandes empresarios que formaban parte de la llamada "familia revolucionaria", sino en su camino atropellaron a pequeños y medianos empresarios que de manera lenta pero sostenida fueron ahogándose financieramente al no poder asumir los costos de la "modernización" y la entrada de México al Tratado de Libre Comercio.

Como mencionamos arriba, otro de los actores políticos relevantes –aunque en un ámbito distinto– es sin duda el narcotráfico. Por obvias razones, su influencia es "subterránea", pero no por ello ha dejado de convertirse en un actor político cuya acción es de gran impacto social. Los datos sueltos que han ido apareciendo tras los trágicos asesinatos políticos de 1994 –del candidato presidencial priísta Luis Donald Colosio y, meses más tarde, del secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu–, así como las cotidianas "filtraciones" en la prensa, son apenas algunos hilos del complejo entramado

que ha tejido el narcotráfico: sus ramales se han extendido a prácticamente todos los niveles de la estructura gubernamental (incluyendo, por supuesto, ejército y policía), con lo cual refuerzan y agudizan la corrupción. En efecto, el narcotráfico se incrusta de manera fácil en una estructura de corrupción ya establecida, pero la profundiza a niveles impresionantes.

En síntesis, estamos ante un cambio de escenario y una reestructuración de los papeles de cada actor social. La aguda concentración de la riqueza y del poder político trajo aparejado un proceso de recomposición a fondo de los sectores sociales. La agudeza con la que se implanta el modelo en México prácticamente dio fin al tradicional "pacto de caballeros" que, entre sexenio y sexenio, se establecía entre los distintos sectores de la clase dominante. La extrema concentración de la riqueza y el poder realizada en el curso de los doce últimos años impactó profundamente las relaciones de poder político: el ascenso de unos sectores a costa de otros se hizo sin el consenso que antes permitía y propiciaba, hasta hace poco más de una década, el sistema político mexicano.

### *El sistema político mexicano pierde piso*

La resistencia al modelo neoliberal también surge al interior de las instituciones tradicionales dominantes, entre ellas el partido de Estado, Partido Revolucionario Institucional (PRI). La aplicación del modelo exigía como premisa fundamental el *desplazamiento profundo* del Estado y, sobre todo, el deslinde claro (y posterior abandono) de las bases ideológicas del sistema político fundadas tras la revolución de 1910-1921. Los sectores tradicionalistas del partido ("los dinosaurios") que mantuvieron durante décadas sus privilegios al amparo del recurrente discurso de la revolución, empezaron a ser desplazados por "la generación del cambio" (jóvenes tecnócratas en su mayoría formados en universidades extranjeras). Acostumbrados al pacífico recambio sexenal de los "equipos políticos", los grupos tradicionales vieron de pronto cómo los tecnócratas, con poca o nula experiencia política, arrasaban con los puestos de poder.

De otra parte, también el abandono del nacionalismo revolucionario —sobre todo de los supuestos que, más allá del discurso, apelaban a la defensa de la soberanía y al cumplimiento de demandas de las masas empobrecidas—, también generó a mediados de los años ochenta una corriente de carácter progresista al interior del propio partido oficial. Más tarde, esta corriente que intentó inicialmente una lucha dentro de las mismas estructuras partidarias, se desprendió del PRI y pasó a conformar una de las corrientes opositoras más sólidas y de mayor influencia en el país: el neocardenismo.

Atenazado desde estos dos flancos, el piso se remueve; la columna vertebral del sistema político mexicano (el presidencialismo, así como su aparato electo-

ral-político, el PRI) sufre las consecuencias. Con el abandono de las bases ideológicas que lo sustentaron, con la pérdida de buena parte de su base social y empantanado en su propia corrupción, el PRI entró en un acelerado proceso de descomposición. Su gran fortaleza de antaño –Estado y partido fundidos– es ahora, paradójicamente, la traba principal para lograr transformaciones internas: esto explica desmembramientos, algunos recurrentes votos diferenciados en las Cámaras y, lo que resulta más grave, la reedición de los asesinatos políticos como forma de solucionar diferencias internas.

Por si esto fuera poco, el pacto con las grandes centrales empresariales empieza a tambalearse ante las políticas gubernamentales que privilegiaron sólo a ciertos sectores. La estructura corporativa tuvo aún algunos éxitos dentro de los "pactos económicos" que año tras año del sexenio salinista se firmaron entre gobierno, empresarios y centrales sindicales oficiales. Sin embargo, a pocas semanas de haber iniciado el nuevo gobierno zedillista –tras la devaluación de diciembre de 1994 y las medidas de ajuste de marzo de 1995– tales pactos parecen haber quedado prácticamente sin ninguna posibilidad de reestablecimiento.

### *Las formas de lucha política en desarrollo*

En el plano de las consecuencias políticas, el modelo neoliberal está sellado por una contradicción básica: si bien le es inherente la aguda concentración del poder, por otro lado alienta una "desconcentración" o "disgregación" social; es decir, tiende a desintegrar formas organizativas, a recomponer sectores sociales, a dispersar espacios de poder. Es en este marco que se explicaría la aparición de nuevos actores en el llamado sector popular, así como la ampliación de la marginación política.

Las formas organizativas tradicionales que durante décadas se fueron desarrollando en México, tienden a modificarse ante el embate de la política neoliberal: surgen organismos barriales, de derechos humanos, de defensa del voto, entre muchos otros. Una característica novedosa a destacar es que ahora la exclusión no sólo toca a los marginados de siempre: hoy también otros sectores que antaño no habían sido afectados en demasía, sufren los efectos de la crisis. El ejemplo más claro es el de aquellos grupos –sectores medios y pequeños y medianos empresarios– que, en aras de la "modernización empresarial", o deslumbrados por la prometida entrada a la modernidad, asumieron deudas que actualmente los han puesto al borde la quiebra.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Este es el caso, por ejemplo, de los grandes, pequeños y medianos productores agrarios reunidos en el movimiento denominado El Barzón, organización que incrementa su presencia nacional y que ha realizado algunas de las movilizaciones más importantes del periodo. El Barzón se funda a raíz del inusitado incre-

Pareciera existir, así, una tendencia a la formación de algún tipo de alianza entre los diversos sectores afectados, independientemente de su origen social. En algunos sectores empieza a ser claro que existe una causa única (las medidas neoliberales) con diversidad de efectos: por lo pronto a nivel de intuición, la sociedad empieza a comprender que, por ejemplo, las altas tasas de interés bancario que provocan innumerables quiebras a pequeños y medianos empresarios, se equiparan con los problemas de desempleo, carestía de la vida, falta de vivienda, bajos ingresos, que afectan directamente a los sectores populares.

Tal alianza se encuentra en germen y se ha traducido hasta ahora en algunos acercamientos esporádicos. Como una expresión de esto, podríamos mencionar la marcha independiente del 1º de mayo de este año en la cual –al decidir la cúpula del sindicalismo oficial que en esa ocasión no se realizaría la tradicional conmemoración argumentando que “la crisis exigía austeridad”– se mezclaron trabajadores, despedidos, colonos, desempleados y estudiantes con, sintomáticamente, los pequeños y medianos empresarios en peligro de ver embargados sus bienes por los bancos. La tendencia a confluir diversas organizaciones sociales estaría marcada por un hecho común a todos: los nefastos efectos sociales de las medidas económicas aplicadas.

A lo largo del sexenio salinista se han dado movimientos locales de resistencia social o política con perspectivas de convertirse en expresiones de carácter nacional popular. De la misma manera que las nuevas expresiones políticas de América Latina se fincan en el rechazo a las consecuencias del modelo económico, en México se ha mostrado una inconformidad social que, sin embargo, no ha logrado frenar ninguna de las medidas del programa económico y, mucho menos, definir un programa y un poder alternativos con capacidad de hegemonía democrático popular.

Sin duda, capítulo especial merece la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Por su complejidad en cuanto fenómeno político, el análisis del zapatismo rebasa las posibilidades de este ensayo: su novedosa concepción estratégica que los ha llevado a manejar creativamente la relación entre lo político y lo militar; la forma audaz mediante la cual intentan establecer vínculos con los sectores populares y grupos progresistas de la

---

mento de las tasas de interés, el cual provoca una crisis de pagos de créditos agrarios que fueron contraídos “a la palabra” en los albores del régimen de Miguel de la Madrid (1982-1988). Ante las amenazas de embargo, los barzonistas han tenido negociaciones con el gobierno, cuyo infructuoso resultado los ha llevado a organizar bloqueos de plazas públicas y carreteras, cierres simbólicos de sucursales bancarias, plantones frente a oficinas gubernamentales, entre otras muchas acciones. Todas ellas expresan, en su dramatismo, el abandono oficial de una política agraria tendiente a favorecer la producción para la alimentación de las mayorías y el menosprecio a un movimiento de resistencia a los altos costos de la aplicación del modelo neoliberal.

sociedad civil y propiciar su avance; las características *sui géneris* de sus liderazgos; el hábil manejo de los medios de comunicación nacionales e internacionales que les ha redituado ganancias políticas importantes, y hasta el lenguaje poco usual en movimientos insurgentes –tan sólo para hablar de algunos elementos– nos permiten pensar que estamos ante el primer movimiento insurgente latinoamericano que *sintetiza creativamente las concepciones y métodos organizativos y de lucha que caracterizaron a los ciclos de lucha armada que se desarrollaron en nuestro continente en los años sesenta y, más tarde, en el periodo 1970-80*. La tarea de analizar al zapatismo no sólo en cuanto a sus raíces particulares y su impacto en la sociedad mexicana, sino con una visión que, rebasando la actual coyuntura, lo enfoque en cuanto fenómeno que trasciende las fronteras nacionales, es una tarea que está en curso.

Habiendo ganado un espacio como interlocutor ante amplios sectores políticos que desde diferentes caminos luchan por la democracia en el país, el EZLN tiende a conformarse en un núcleo con capacidad de convocatoria nacional. Evidentemente no se trata de un liderazgo tradicional donde el objetivo es *atraer hacia la lucha armada* a las mayorías descontentas; estamos más bien ante un proceso donde, desde la legitimidad lograda por los alzados en armas, se estaría buscando desarrollar y agrupar a las diversas formas de lucha pacífica que, todavía con cierto grado de dispersión, existen en el país. De hecho, es poco probable que en el mediano plazo se conforme en México un liderazgo único (sea éste armado o no), pero sí es posible afirmar que el EZLN tiende a convertirse en uno de los núcleos organizativos de la protesta social.

Una muestra de las potencialidades de este movimiento fue, indudablemente, la Convención Nacional Democrática (CND), realizada poco antes de las elecciones de agosto de 1994, en plena zona zapatista. La Convención fue producto de una convocatoria plural de la que participó el propio EZLN y que reunió a más de siete mil integrantes y dirigentes de organizaciones sociales y políticas de todas las tendencias opositoras al gobierno. Emulo de la Convención Nacional de Aguascalientes, que sentó en la mesa de negociaciones a los revolucionarios de 1915, la CND se propuso, de manera unitaria, la sustitución por vías legales y pacíficas del régimen de partido de Estado, el inicio de una transición a la democracia y la convocatoria a un nuevo Constituyente.

El inmenso esfuerzo realizado por la sociedad civil, antes y después de la Convención, en apoyo a una solución pacífica del conflicto chiapaneco, y la consecución de principios de democracia, justicia y vida digna para todos, son muestra del inmenso caudal de expresiones solidarias a que ha dado lugar el cada vez mayor cierre de opciones políticas institucionales por parte de la élite dirigente actual.

No podemos olvidar que, a pesar de no haber sido aún desplegada en su

totalidad, existe una gran acumulación política en las diversas vertientes de lucha. Junto a la demanda de una redefinición de la economía que le otorgue un sentido nacional popular, se ha incrementado la capacidad de un fuerte movimiento cuya concepción de la lucha por la democracia se liga de manera directa con la búsqueda de una distribución del poder en la sociedad y por la participación de ésta en la determinación de la política económica. Con todo y los distintos niveles de desarrollo político-organizativo entre el EZLN y las fuerzas de oposición no armadas, las luchas de ambos actores juegan papeles importantes en el escenario político.

La mayor limitación actual es la *falta de una dirección política capaz de estructurar nuevas relaciones políticas nacionales*. Existen hasta hoy estructuras organizativas que responden o bien a determinadas demandas y renacen en determinadas coyunturas, o cuya capacidad de movilización tiende a desbordar su origen local o regional. Su sola existencia muestra, sin duda, una acumulación política de grandes dimensiones, *cuya madurez sin embargo no está aún a la altura del nivel de la crisis política actual*.

Debemos agregar que gran parte de las formas permanentes de participación que se han desarrollado en los últimos diez años en el país, se han ubicado sobre todo en el plano de *la inconformidad*, pero no han logrado trascender a plenitud al nivel de una opción alternativa. La acumulación alcanzada por parte de la sociedad civil (que actúa por fuera, y a veces en contra, de las estructuras organizativas tradicionales) no ha sido suficiente para construir una alternativa de poder (la cual, como bien sabemos, no sólo es la suma de historias organizativas, sino la síntesis de procesos de lucha exitosos y fracasados).

Desde el ámbito de la lucha por la democracia, un elemento interesante a destacar es la tendencia a la formación de *liderazgos regionales y/o sectoriales* que abarcan desde la lucha propiamente partidaria (Tabasco, Chiapas, Guanajuato), hasta aquellas otras con acompañamiento de los partidos (Asamblea de Barrios, colonos, organismos en defensa del voto, etcétera) y otras más que surgen como expresión directa de la sociedad civil.<sup>8</sup> Ante este cuadro, es lógico que las demandas sean tan variadas como variados son los sectores que las enarbolan; sin embargo, puede afirmarse que todas ellas se concentran en dos grandes polos: contra los efectos de la política económica y por la democracia en el país.

<sup>8</sup> En el mismo tenor que El Barzón, recientemente han empezado a surgir organizaciones que aglutinan a deudores de tarjetas de crédito a quienes, en el periodo de apertura financiera, se les otorgaron facilidades indiscriminadamente y hoy se encuentran agobiados por los exorbitantes intereses bancarios; asimismo, ciertas expresiones de los sectores medios, como las "señoras de Polanco" descontentas ante lo que consideran el engaño del "discurso modernizador gubernamental" y cada vez como un clamor que se va generalizando a todos los sectores sociales, expresiones aún vagas de demanda de juicio político al equipo gubernamental salinista, considerado el responsable directo de la crisis económica actual.

### *Perspectivas de un escenario futuro*

El complejo panorama mexicano nos obliga a preguntarnos sobre el futuro. El clima de crisis política y económica nacional da la impresión de que el país se encuentra ante un caos que abre innumerables opciones. Sin embargo, desde la sociología política las opciones no aparecen por especulaciones ideológicas, sino por el desarrollo de fuerzas políticas maduras. Si bien una visión dicotómica es poco útil para prever los escenarios futuros, tampoco creemos que existan infinitas formas en que una coyuntura puede resolverse. Ciertamente, la mexicana es una situación compleja por la cantidad de elementos, actores, reacomodos políticos y fuerzas contrarias que se enfrentan; se trata, en síntesis, de una crisis integral, en el sentido que lo apuntábamos arriba. De ahí que, bajo una mirada superficial, fácilmente pudiera concluirse que el caos actual es propicio a innumerables e impredecibles salidas.

En realidad el caos es aparente o, en todo caso, susceptible de ser analizado. Aún más (y en eso reside la gravedad del asunto), la crisis actual no abre márgenes de acción que permitan multiplicar opciones para superarla. Creemos que el punto de partida de un análisis de la crisis mexicana, no es otro que empezar por caracterizarla: tal como apuntábamos arriba –y desarrollamos en las páginas precedentes– México vive una crisis que hemos calificado de integral. Su complejidad proviene precisamente de la interdependencia (y condicionamiento mutuo) de los diversos ámbitos que hacen a la estructura de una sociedad.

No es, pues, sólo una crisis económica; es, además, una crisis política y social, cada una de las cuales se concretiza en actores políticos con visiones propias sobre el camino a seguir. No obstante, las contradicciones básicas que hoy están por definirse se centran en los binomios: autoritarismo/democracia, modelo económico excluyente/modelo económico integrativo. El abanico de eventuales soluciones a la crisis no es, por tanto, tan amplio como pareciera.

Debido al desarrollo actual del espectro de fuerzas que, en mayor o menor grado, se oponen tanto al modelo político-económico, como a las medidas con que se pretende preservarlo, resulta difícil pensar en un liderazgo único; pero sí en la posibilidad de una dirección coordinada que recupere las *acumulaciones regionales y sectoriales* que se encuentran dispersas por todo el territorio. Hasta ahora, como hemos dicho, este proceso en ciernes (para el cual existirían condiciones mínimas) no avanza con la misma celeridad que lo hace el proceso de recomposición que intenta la clase dominante. En otras palabras, se desarrolla ante nuestros ojos la más grave crisis del sistema político mexicano posrevolucionario, sin que haya madurado un contrapoder.

El grave peligro que deriva de lo anterior es que frente a esta situación, el tiempo –por lo menos en esta coyuntura precisa– está a favor de quienes

pretenden una solución de derecha como forma de evitar un eventual derrumbe del sistema. Cuando hablamos de "solución" no estamos pensando en una restauración del viejo sistema que se ha desgastado: la solución de derecha significaría el afianzamiento de un autoritarismo sin velos ni mediaciones que permitiría sostener a toda costa la base político social del modelo económico. Se trataría, entonces, posiblemente de la perspectiva de un *neopopulismo autoritario basado en la fuerza directa del ejército en tanto sustento inmediato del poder civil autoritario, cuya fachada podría ser un bipartidismo conservador*.

Desde la perspectiva de los sectores gobernantes, la única variable que puede desmoronar al sistema es la protesta social generalizada y sin control. De ahí la necesidad del grupo gobernante de manejar el conflicto en Chiapas de manera urgente y evitar a toda costa que se convierta en un eje aglutinador de la inconformidad social. Así, desde el punto de vista del gobierno, las demandas del EZLN deben ser resueltas a nivel regional y local.

Por lo demás, y ante eventuales estallidos sociales generalizados, la represión sería una solución posible a corto plazo, pero ésta no garantiza necesariamente una pronta pacificación. No por casualidad, una de las últimas medidas salinistas fue agrupar en una sola instancia a todos los organismos encargados de la "seguridad pública". Mientras tanto, la represión selectiva ya está siendo usada para detener ciertas protestas de algunos sectores sociales, sean éstas de carácter local y/o regional. Para el grupo gobernante se ha convertido en una prioridad *ganar tiempo para lograr una recomposición del sistema de dominación bajo sus particulares términos*.

Un elemento que no debe perderse de vista es el papel rector que subterráneamente ha ido adquiriendo el ejército en las decisiones políticas. Ante la imagen de debilidad del actual titular del Poder Ejecutivo, ante el descontento generalizado, ante la crisis del sistema político, ante el descontrol en buena parte de la estructura de poder civil, el ejército ha ganado espacios de decisión importantes, por lo pronto directamente con respecto a la situación en Chiapas. El terreno para una solución abiertamente autoritaria ha sido, por tanto, abonado.

La modernización neoliberal mexicana prometió un tránsito a la democracia plural, crecimiento económico, saneamiento de las finanzas y libre mercado. En realidad, la reforma del Estado ha sido un proceso autoritario de transformación del bloque de poder, de integración con los capitales estadounidenses, de alineamiento con el bloque político norteamericano, de acumulación súbita a partir de los negocios financieros articulados con las políticas estatales y de permisibilidad y connivencia con los negocios ilícitos y el tráfico de enervantes. No se produjo una modernización política real ni siquiera en el sentido de abrirse a un bipartidismo real; tampoco hubo modernización económica que permitiese

el libre juego de capitales y de salarios en el mercado. En este contexto, casi resulta lógica la gravedad de la crisis mexicana actual.

Tanto en el gobierno como en algunas fuerzas políticas nacionales se sostiene que México transita a la democracia a través de un difícil y penoso esfuerzo de civilidad nacional que abarca a una gran mayoría de ciudadanos. Con dicha apreciación, un problema político objetivo de lucha y correlación de fuerzas sociopolíticas se transforma en un fenómeno de subjetividad política ciudadana. El *quid* de la cuestión, sin embargo, sigue siendo la férrea determinación de los que beneficiados por el modelo de acumulación y el sistema de poder actual, están dispuestos a no ceder sus espacios de decisión y control. La ausencia de reformas profundas en el sistema de dominio y en las instituciones políticas es un síntoma de que no hay tal tránsito democrático y que los avances de la civilidad posmoderna se desmoronan ante un poder cerrado, excluyente y autoritario que recurrentemente da muestras de su incapacidad de cambio.

Por último, una breve reflexión. Propios y extraños se preguntan: ¿qué pasa en México que la protesta popular no va en relación al calibre de la crisis que vive? ¿Por qué —a diferencia de otras sociedades donde ante acontecimientos de menor gravedad y crisis menos generalizadas, la protesta es inmediata— en México las acciones no se han radicalizado? La respuesta también es necesario pensarla desde la historia, desde las características sociogeográficas, desde las modalidades *sui generis* de un sistema político que ha llevado su concepción de la política hasta lo más recóndito de la sociedad, al grado que esa "mentalidad institucional" difícilmente sea consciente para la mayoría de los ciudadanos.

Con todo, las grandes luchas en este país —desde la independencia hasta la revolución— han estado precedidas por largos periodos donde, ante la cerrada oposición a hacer reformas reales, se van incubando profundas contradicciones sociales y políticas que, por lo mismo, provocan estallidos sociales de proporciones desmedidas. No olvidemos una característica más de las grandes luchas sociales mexicanas: crecen y maduran en un proceso desigual por regiones para, en una coyuntura determinada, confluir en un gran proceso de carácter nacional. Estamos, pues, ante un momento histórico similar.

Si la creciente demanda de un diálogo nacional es subestimada (como hasta ahora lo ha sido) por el gobierno, pudiera colocar al país ante condiciones de solución semejantes a las de otras crisis históricas. Todo ejercicio de gobierno debe, para asegurar su continuidad, proveer de espacios institucionales para la concertación de posturas diversas. Tensar los límites de esta relación entre autoridad y obediencia es la apuesta más riesgosa que puede hacer un gobernante.